

La vocación agrícola le hace frente al COVID-19 en beneficio de la seguridad alimentaria

El 11 de marzo de 2020, en horas de la tarde, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le informó al mundo que el contagio del coronavirus, COVID-19, había aumentado exponencialmente por fuera de China. En ese momento estaba presente en 114 países con 118 mil casos reportados y 4.291 personas fallecidas, por lo tanto, se declaró pandemia. A 11 de junio se contaba con 7.343.562 casos reportados y más de 416 mil muertos en el mundo.

Las crisis llevan al ser humano a centrarse en lo importante, a regresar al origen, a lo esencial. Todos los gobiernos al unísono, al cerrar las puertas por la rápida transmisión del virus, miraron hacia dentro, y si bien, la vida y la salud volvieron a ser el centro de la existencia, a la par estuvo la seguridad alimentaria. El sector agropecuario recobró su importancia, su verdadero valor estratégico.

Por ello, en los países desarrollados se han tomado medidas para mitigar los efectos devastadores del COVID-19 en sus sectores agrícolas. Fue así como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció un paquete de alivios por 9,5 billones de dólares, pues a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES*) y la Ley de Autorización de la Corporación de Crédito de Productos Básicos (CCC*) se aprobaron los fondos para el Programa de Asistencia Alimentaria Coronavirus (CFAP*) para productores de productos no especializados como semillas oleaginosas (soya, girasol y canola), cebada cervecera, maíz, algodón de tierras altas, mijo, avena, sorgo, trigo candeal y trigo rojo duro de primavera.

La Unión Europea (UE) estableció también medidas por el COVID-19 bajo el marco de su Política Agrícola Común (PAC). Según el reporte *EU Commission Adopts Agri Food Support Measures*, se permitió aumentar los programas de apoyo a productos como el aceite de oliva, e incluso, flexibilizar su política de competencia para lograr que se estabilizaran los mercados de estos productos agrícolas.

Sin duda alguna, no podríamos estar más de acuerdo con la declaración de Julio Berdegué, Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe: “Es clave que los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como actividades estratégicas de interés público nacional, con apoyo de todos los órganos del Estado y de la población. Es esencial mantener vivo el sistema alimentario, para que la crisis sanitaria no se transforme en una crisis alimentaria”.

Así mismo, la FAO invitó a los países, en una publicación del 24 de abril de este año, a centrarse en evitar el hambre, pues asegura que “si la recesión mundial, debido a los efectos del COVID-19, desencadenara una reducción en la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de entre 2 y 10 puntos porcentuales en todos los países en 2020, entonces el número de personas desnutridas en los países importadores netos de alimentos aumentaría de 14,4 millones a 80,3 millones, y la mayor parte del aumento provendría de países de bajos ingresos”.

También, en esta publicación asegura que los países deben estimular económicamente el desarrollo interno de las cadenas de suministro de alimentos, al tiempo que deben proteger el acceso a los producidos locales, regionales y globales. Es decir, la prioridad debe estar en asegurar la alimentación de las poblaciones.

Es que el problema de la sostenibilidad alimentaria que existía antes del COVID-19 se ha agudizado. El informe de la Red mundial contra la crisis alimentaria publicado por la FAO indicó que, “a finales de 2019, 135 millones de personas de 55 países y territorios sufrían de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 o superior de la CIF/CH); 75 millones de niños sufrían de retraso en el crecimiento; y 17 millones padecían emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura). Se trata del nivel más alto de inseguridad alimentaria aguda y malnutrición documentado por la Red, desde la primera edición del informe en 2017”, cita el documento en su resumen.

Este informe es el resultado de un proceso de análisis y de consenso, en el que participaron 15 socios internacionales humanitarios y de desarrollo: el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS), la UE, la Red de sistemas de alerta temprana en caso de hambruna (FEWS NET*), el Módulo de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, el Grupo de Nutrición Mundial, la Unidad de Apoyo Mundial de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF*), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD*), el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI*), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF*), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID*), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA*) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR*). Por tanto, es un llamado multisectorial para trabajar por la sostenibilidad alimentaria y por seguros aliados que velen por ella.

Colombia es uno de los países que ha sido considerado por la FAO como una despensa alimentaria para el mundo. En su último informe asegura: “una de las principales oportunidades que tiene Colombia para fortalecer la producción rural es contar con una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas, de las cuales actualmente solo se utiliza el 19 %, por lo que más de 32 millones aún están disponibles para convertirse en senderos de producción agrícola que dinamicen el campo”.

Es el momento del desarrollo agropecuario para Colombia. Tenemos tierra, agua, gente y

recursos para desarrollar la vocación agrícola. Es necesario contar con una estrategia clara, teniendo una visión empresarial del campo colombiano que nos permita hacer realidad la vocación agrícola que tenemos y que actualmente está siendo demanda por las necesidades de alimentación de nuestro país, la región y el mundo.

El sector palmero inició en Colombia durante los años 50 y 60, por un esfuerzo gubernamental y privado para subsanar la escasez de aceite vegetal en el mercado local, y hoy en día tiene la producción suficiente para abastecer el mercado local y exportar sus excedentes. El lograr la plenitud del desarrollo agropecuario necesita decisión estratégica del Estado, consistencia en la política pública, en el impulso y en los incentivos agropecuarios.

* Por sus siglas en inglés.

The Agricultural Vocation Stands up to COVID-19 for the Benefit of Food Security

In the afternoon of March 11, 2020, the World Health Organization Director-General, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informed the world that the COVID-19 coronavirus outbreak was growing exponentially outside of China. At the time, there were 118 thousand confirmed cases in 114 countries, with 4,291 people dying to the virus. The outbreak was declared a pandemic. As of June 11, there were 7,343,562 confirmed cases and over 416 thousand deaths worldwide.

Crises lead humanity to focus on what is vital and return to its roots and essence. By closing their doors due to the rapid transmission of the virus, all governments in unison looked inward, and life and health were once again at the center of existence, hand in hand with food security. The agricultural sector regained its importance and its actual strategic value.

Therefore, developed countries have taken measures to mitigate the devastating effects of COVID-19 on their agricultural sector. Hence, after the United States approved funds through the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES) and the Commodity Credit Corporation (CCC) charter act, the United States Department of Agriculture (USDA) announced a USD 9.5 billion relief program for growers of non-specialized products such as oilseeds (soy, sunflower, and rapeseed), malting barley, corn, highland cotton, millet, oat, sorghum, durum wheat, and hard red spring wheat.

The European Union (EU) also implemented measures to face COVID-19 under the Common Agricultural Policy (CAP). According to the report *EU Commission Adopts Agri-Food Support Measures*, the EU increased the support programs for products such as olive oil and even made its competition policy more flexible to stabilize the markets of these agricultural products.

We fully agree with the words of Julio Berdegue, Regional Representative for Latin America and the Caribbean of the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations: “Governments must declare food and agriculture as strategic activities of national public interest, with the support of all state organs and the population. Keeping the food system alive is essential, so that the health crisis does not become a food crisis.”

Similarly, on a statement released on April 24 of this year, the FAO called upon the countries to focus on avoiding hunger, mentioning that “if the anticipated global recession, due to the effects of COVID-19, were to trigger a reduction in the growth rate of gross domestic product (GDP) of between two and ten percentage points in all countries in 2020, then the number

of undernourished people in net food-importing countries would increase by 14.4 million to 80.3 million most of them from low-income countries.

The statement also mentions that economic stimulus in all countries must be focused on keeping the food supply chains functioning, while also protecting access to locally-, regionally- and globally-produced food. In other words, ensuring that people have access to food must be a priority.

The problem of food sustainability dating to before the COVID-19 outbreak has become more urgent. The report of the Global Network Against Food Crisis published by the FAO mentioned that “in late 2019, 135 million people in 55 countries suffered acute food insecurity (IPC Phase 3 or worse); 75 million children are stunted, and 17 million suffered from wasting (low weight for height). This is the highest level of acute food insecurity and undernourishment documented by the Network since the first issue of the report in 2017.”

This report is the result of an analysis and consensus-building process involving 15 international humanitarian and development partners: the Permanent Interstate Committee for drought control in the Sahel (CILSS), the European Union (EU), the Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET), the World Food Safety Module of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the Integrated Food Security Phase Classification (IPC), the Intergovernmental Authority on Development (IGAD), the International Food Policy Research Institute (IFPRI), the Central American Integration System (SICA), the Southern African Development Community (SADC), the United Nations International Children’s Fund (UNICEF), the United States Agency for International Development (USAID), the World Food Programme (WFP), the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Therefore, it is a multi-sectoral call to work for food sustainability and for reliable partners to ensure it.

Colombia is one of the countries the FAO considers as a global food pantry. In its latest report, it mentions that: “One of the main opportunities of Colombia to strengthen its rural production is its agricultural frontier that covers 40 million hectares, of which only 19% is currently being used; therefore, over 32 million hectares are still available to be converted into agricultural production that will make the countryside more dynamic.”

It is time for agricultural development in Colombia. We have land, water, people, and resources to develop the agricultural vocation. There must be a clear strategy and a business vision of the Colombian countryside that will allow us to make our agricultural vocation a reality, as currently demanded by the food needs of our country, the region, and the world.

The development of the oil palm sector in Colombia began in the 50s and 60s with government and private efforts to face the shortage of vegetable oil in the local market. Today, the country produces sufficient oil to supply the domestic demand and export the surplus. Achieving full agricultural development requires strategic decision-making by the State, consistency in public policies, and the promotion and incentives for agriculture.